

Norte del Cauca¹

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

ABRIL DE 2019



Resumen

En el norte del Cauca las comunidades y la institucionalidad pública realizaron una fuerte apuesta por la implementación del Acuerdo de Paz. En la actualidad existe una altísima frustración debido a su percepción de que no se van a dar más avances en esta línea. La percepción general es que tanto PNIS como PDET agotaron sus capacidades, no cuentan con recursos ni tampoco hay compromiso político del gobierno Duque. Aunque aún hay disposición para seguir trabajando en la implementación del Acuerdo, los distintos actores, y en especial las comunidades, reclaman acciones concretas, para que lo avanzado no se quede en una lista de promesas.

1. Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

En el PDET de *Alto Patía y Norte del Cauca* se agrupan 17 municipios del Cauca, cinco del norte de Nariño y dos del sur del Valle. En diciembre de 2018 se dio la firma del Plan de Acción para la Transformación Territorial (PATR) y a partir de ese momento, ha primado la incertidumbre y la sensación de que no habrá más acciones en línea con este programa, principalmente por falta de recursos.

Las organizaciones sociales y la institucionalidad destacan el amplio proceso de participación que generó la metodología PDET, al igual que el reconocimiento a los distintos actores territoriales en paridad para el diálogo. No obstante, tras casi cuatro meses de la firma de los PATR, son muy escasas las acciones visibles en línea con los compromisos contenidos en ese documento. La desmotivación y la molestia con la institucionalidad, priman entre las comunidades y organizaciones sociales.

Contenido

Estado de la implementación del Acuerdo de Paz

Posiciones de los actores claves en el territorio

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Principales preocupaciones

La implementación en cifras

¹ Municipios de Buenos Aires, Caloto, Caldono, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Toribío, Suárez, Villa Rica.

Los empresarios han manifestado su disgusto pues la metodología no contemplaba su participación sino hasta después del cierre de la fase municipal. Ellos perciben que se accedió a ellos una vez consolidada una lista de prioridades del territorio, en búsqueda de financiación sin haber podido ser parte del diálogo. El gremio azucarero del Valle incluso ha señalado que su acercamiento ha sido por iniciativa propia y no desde el Programa.

En lo corrido de 2019, la ART desarrolla algunas Obras PDET (anteriormente PIC) a la vez que elabora el Plan Operativo de Gestión de la Oferta (POGO), documento en el cual se encargan de buscar y asignar posibilidades de respuesta y gestión de las iniciativas consignadas en el PATR. Este es un proceso que toma tiempo y que depende también de los Planes de Desarrollo que diseñen el próximo año los gobernadores y alcaldes electos. De acuerdo al testimonio de funcionarios, se ha logrado asignar acciones para el 5% de las iniciativas del PATR. Ellos hacen un llamado a recordar que la Reforma Rural Integral es un proceso de mediano y largo plazo que no puede mostrar resultados tan inmediatos.

b) La reincorporación

Tras el primer año del proceso de dejación de armas, gran parte de los excombatientes de los ETCR del norte del Cauca, ya no habitaban estos espacios. A marzo de 2018² permanecía menos de la mitad de quienes ingresaron: La Elvira - Buenos Aires 48% (140), Los Monos - Caldono 37% (150) y Monterredondo - Miranda 45% (100). Los excombatientes han retornado a sus lugares de origen y las comunidades reclaman procesos de reconciliación, pues hasta el momento la institucionalidad no ha trabajado en ello - solo algunos ejercicios que provienen de FARC. De acuerdo con el seguimiento realizado por la FIP desde el inicio de la implementación, en el norte del Cauca se han presentado 15 agresiones a excombatientes, de las cuales 12 fueron homicidios, dos agresiones a familiares y una tentativa de homicidio. Estas han tenido lugar en Corinto (3), Caloto (3), Toribío (2), Buenos Aires (2), Suárez (2), Miranda (2) y Stder. de Quilichao (1).

Los excombatientes han impulsado varios proyectos productivos, que por ser autogestionados y no tener acompañamiento, no han tenido éxito. Solo hay dos grandes proyectos productivos aprobados para excombatientes del Cauca, uno para el ETCR de Caldono y el otro para el de Patía. Así mismo hay un proyecto en espera de aprobación para el ETCR de Buenos Aires. En la actualidad los proyectos productivos son fuente de *trabajo* pero no de *ingresos*; son proyectos agropecuarios que se demoran varios años en despegar.

² Estas son las cifras más recientes publicadas por la ARN por medio de la plataforma *La Paz en el Terreno*.

Ante el horizonte de elecciones locales se espera que FARC participe en campaña, pero no se anticipa una votación significativa debido a la tendencia tradicional del voto caucano en elecciones locales y como consecuencia de las décadas de violencia a manos del grupo. Se espera que sus resultados favorables se den en cargos locales en zonas rurales.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

Aunque el PNIS ha anunciado para abril el inicio de la ruta con un segundo grupo de casi 2000 familias que estaba pendiente, existe la percepción general en el territorio de que el PNIS ha fracasado en su misión y que no va a mostrar logros más allá de lo realizado a la fecha. Este problema tiene que ver con que en un principio la tarea de los funcionarios del PNIS fue firmar acuerdos colectivos con tantos municipios focalizados como fuera posible, sin considerar que existiera efectivamente el recurso para desplegar el programa. Hoy se ven las consecuencias, pues quedaron varios municipios animados con un programa que no llegó.

De los municipios del norte, solo Miranda se encuentra vinculado al PNIS³ y para 2016, previo al inicio del programa, contaba con 5.98 hectáreas de coca según el conteo de SIMCI. Para la misma fecha el Cauca sumaba 12.595 hectáreas de coca y solo 4 municipios del norte registraban cultivos según este conteo (Buenos Aires, Caloto, Corinto y Miranda).

Aunque el Cauca representaba el cuarto departamento con mayor volumen de cultivos de coca al inicio de la implementación, la problemática del norte radica también en la marihuana y el programa no ofreció una estrategia de sustitución para estos cultivos ni para la amapola. Aunque no existen cifras sobre marihuana, el principal enclave para su cultivo en el país se encuentra en los municipios caucanos de Caloto, Toribío y Corinto.

d) Garantías de Seguridad

Aunque los primeros meses de la implementación del Acuerdo de Paz fueron de mucha calma para la región, la aparición de grupos armados en el norte a mediados de 2017 rápidamente encendió las alarmas frente a la seguridad de las comunidades. Las dinámicas de control territorial y poblacional han retornado a diferentes municipios, lo cual ha traído consigo un incremento en amenazas, extorsiones, homicidios y delincuencia.

De igual manera, los homicidios a líderes mantienen a las comunidades y especialmente a las organizaciones sociales preocupadas por su seguridad. El Cauca es el departamento con mayor número de líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación, de

³ En la nueva ronda se harán partícipes familias de Jambaló.

los cuales 19 han ocurrido en el norte del departamento entre 2017 y 2018. Durante 2019, han ocurrido tres homicidios en el norte del Cauca.

2. La situación de las víctimas

De acuerdo al Registro Único de Víctimas, el Cauca cuenta con 293.023 víctimas de las cuales 81.562 (28%) corresponden al norte del departamento. Debido al incremento del conflicto que ha habido durante 2018 y 2019, su impresión general es que no ha habido cambios en el territorio con la implementación del Acuerdo. Las comunidades han vuelto a ser objeto de amenazas por lo tanto no hay mejoría en su percepción de seguridad.

Adicionalmente las víctimas perciben que la alta inversión del Estado en la puesta en marcha de la implementación, se ha dado a costa de los recursos para su restitución e indemnización, por lo cual sienten que la implementación incluso les ha afectado más que traerles beneficios.

3. Posiciones de los actores claves en el territorio

Tanto la institucionalidad pública en el Cauca como las organizaciones de la sociedad civil pusieron sus esfuerzos y sus apuestas en la implementación del Acuerdo de Paz. Esto se evidencia en la alta participación en los espacios de convocatoria de los distintos programas que se desprenden del Acuerdo y en un Plan de Desarrollo Departamental diseñado en torno a la implementación. La tranquilidad percibida en el territorio durante los primeros meses de la implementación motivó aún más a estos actores, sin embargo, con el retorno de dinámicas de violencia, el surgimiento de grupos armados y la percepción de incumplimiento de acuerdos, los ánimos han bajado radicalmente.

Las organizaciones internacionales y las civiles indican que anteriormente conocían a los líderes de los grupos armados y podían tener un diálogo para entrar a territorio y realizar sus labores con las comunidades. No obstante, la situación actual es de zozobra y no saben cómo proceder en el territorio. De igual manera, a los actores en general les preocupa la falta de claridad sobre los recursos para seguir ejecutando la implementación del Acuerdo. Además, la Fuerza Pública reconoce que se prepararon para una región en posconflicto y no necesariamente para enfrentar las nuevas dinámicas de criminalidad y de confrontación que han emergido con la salida de las FARC del territorio.

Se suma a este contexto el incremento de la movilización social en la región, que tiene que ver en buena proporción con la inconformidad frente al incumplimiento de las promesas del Acuerdo de paz. Por ejemplo, respecto a la reciente minga indígena que duró 27 días, se sostuvo que entre los incumplimientos reclamados por los indígenas al gobierno, se incluyen los de acuerdos logrados en escenarios participativos del PDET. Los

indígenas al igual que los campesinos caucanos han realizado paros en el año en curso, y en ambos casos reclamaron que se lleve a cabo lo acordado con las comunidades pues se sienten burlados por el Estado.

4. Principales dinámicas de la confrontación armada

El norte del Cauca fue antes de la firma del Acuerdo de Paz, uno de los principales bastiones de las FARC. Desde mediados de 2017 se ha constituido en la región norte una disidencia del Frente 6, que ha representado una importante amenaza para las comunidades de esta región, y que sumaría aproximadamente 40 miembros de acuerdo a la Fuerza Pública. De igual manera emergieron en la región grupos pequeños autodenominados como ELN y EPL. Estos últimos habrían sido conformados también por excombatientes de las FARC que no se adhirieron al proceso de reincorporación. El EPL particularmente se ha fortalecido desde finales de 2018 y han logrado establecer una importante zona de influencia entre el norte del Cauca y el sur del Valle, enfrentándose recurrentemente con los disidentes por las rutas y el mercado de marihuana.

A pesar de estos enfrentamientos, la Fuerza Pública afirma que estos grupos realizan pocas acciones en su contra para no hacerse muy visibles y ocuparse de las economías ilegales. Los grupos armados de la región se ocupan principalmente del control de la producción y tráfico de coca y marihuana, espacio dejado por las FARC tras el inicio de su proceso de desarme.

Aunque no cuentan con una fuerte injerencia en el norte, es importante destacar el proceso reciente del ELN en el centro y sur del Cauca. Tanto organizaciones sociales como instituciones y agentes internacionales consideran que el fin del proceso de negociación a sido desafortunado, expresando su desacierto con esta decisión. En visitas previas al territorio era claro que la región se encontraba muy esperanzada respecto a lo que pudiera desprenderse de la negociación con el grupo armado, por lo cual es comprensible la preocupación actual. De acuerdo al seguimiento de la FIP, en 2019 solo se ha presentado una acción armada en la que participara el ELN, sin embargo los actores territoriales hablan de un fortalecimiento del grupo y de un incremento de hombres en el territorio.

5. Preocupaciones sobre la implementación

- a) A los distintos actores territoriales les preocupa el futuro de la implementación, pues existe la percepción de que se agotaron los recursos para los programas y que no hay compromiso ni interés del gobierno actual.



- b) Para el caso de PDET preocupa la idea de que no hay recursos propios, sino que la puesta en marcha de las iniciativas dependa en su totalidad de su vinculación al Plan de Desarrollo Departamental.
- c) Las comunidades ya no ven opción de vinculación al PNIS y por el contrario empieza a resonar ampliamente la idea de erradicación forzada. Los indígenas incluso han realizado propuestas al gobierno sobre cómo proceder con el programa para sus comunidades, pero dicen no haber tenido acogida.
- d) A algunos actores les inquieta la posibilidad de que el abandono de ETCRs y el retorno de excombatientes a sus comunidades, devenga en el engrosamiento de las filas disidentes.
- e) Según la *Cumbre Nacional de Mujeres y Paz*, en este departamento preocupa la falta de programas de liderazgo político y social para mujeres, las dificultades de la materialización del Programa Nacional de Garantías para Líderesas y Defensoras de DDHH del MinInterior, las dificultades para el acceso focalizado a tierras, la aparición de nuevas violencias contra las mujeres perpetradas por grupos armados ilegales, y la ausencia de enfoque de género en el PNIS.
- f) Preocupa que el fin de las negociaciones con el ELN pueda traer un incremento de la violencia en el departamento, que se suma a las dinámicas que han retornado durante la implementación del Acuerdo.

6. La implementación en cifras



